



UCAB

Esta es una publicación  
del Centro de Estudios  
Políticos de la Universidad  
Católica Andrés Bello

**Benigno Alarcón**

Director del Centro de  
Estudios Políticos - UCAB

**Juan Manuel Trak**

Investigador Centro de  
Estudios Políticos - UCAB

**Daniel Fermín**

Investigador Centro de  
Estudios Políticos - UCAB

Editor Política UCAB

**Juan Manuel Trak y Daniel  
Fermín**

Redacción e investigación

**Reinaldo J. Hernández S.**

Diseño Gráfico

**Edgiannid Figueroa**

Montaje

## CONTENIDO

### PÁGINA I

Observación, Postulaciones  
y Pre-campaña

## Observación, Postulaciones y Pre-campaña

### I. Misión de UNASUR

A menos de 2 meses que se celebren las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, se mantiene el debate sobre la calidad de la observación u acompañamiento electoral presente en dichos comicios. Tal y como se ha señalado en el Reporte No. 15, el reglamento de acompañamiento internacional y observación nacional impide a las organizaciones multilaterales y organismos electorales de otros países llevar a cabo un análisis del procesos electoral que pueda ser considerado válido y fiable.

El jueves 20 de octubre el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) emitió una nota de prensa en la que se indicaba su retiro de la misión de acompañamiento de UNASUR. Las razones detrás de esta decisión residieron, por un lado, en la negativa por parte de las autoridades venezolanas a admitir al ex presidente del TSE, Nelson Jobim, como jefe de la misión. No obstante, desde UNSAUR se indicó que Jobim no había sido vetado por dicha organización y que era uno de los varios nombres considerados para presidir la misión<sup>1</sup>. En este orden de ideas, el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, indicó que “respetuosamente [solicita] al Gobierno venezolano que por favor autorice lo más pronto posible al jefe de la misión que se sugirió”<sup>2</sup>; añadiendo que la única forma que Colombia y otras naciones del bloque sudamericano participen en el proceso electoral venezolano sería con la presencia de un observación electoral “que genere la credibilidad y garantías suficientes”.

Por otro lado, el Tribunal Superior Electoral brasileño también indicó que su retiro de la misión de acompañamiento como consecuencia de que la falta de respuesta por parte las autoridades electorales venezolanas para que la misión pudiera estar presente durante las auditorías al voto electrónico, así como observar la equidad en la contienda electoral con al menos

## Observation, Nominations and Pre-campaign

### I. UNASUR Mission

Less than two months before the parliamentary elections scheduled for December 6, 2015, the debate continues concerning the quality of the observation or accompaniment to be present for these elections. As mentioned in Report No. 15, under the regulations governing international accompaniment and national observation, multilateral organizations and electoral bodies from other countries are not allowed to perform the type of electoral process analysis that could be considered valid and reliable.

On Thursday, October 20th, the Superior Electoral Court of Brazil (TSE) issued a press release announcing that it was withdrawing from the UNASUR accompaniment mission. The reasons given for this decision were, on the one hand, the Venezuelan authorities' refusal to accept the former chief justice of the TSE, Nelson Jobim, as the head of mission. UNSAUR itself, however, has stated that Jobim had not been approved by that organization and that his was one of several names being considered to head the mission<sup>1</sup>. In the case of this same issue, Colombian President Juan Manuel Santos, said that he “respectfully [asked] the Venezuelan government to please authorize the head of mission being suggested as soon as possible.”<sup>2</sup> He then went on to say that the only way that Colombia and other nations from the South American bloc would take part in the Venezuelan electoral process would be with the presence of electoral observation that “generates credibility and sufficient guarantees.”

Furthermore, the Brazilian Superior Electoral Court also stated that its withdrawal from the accompaniment mission was due to the lack of a reply from the Venezuelan electoral authorities to allow the mission to be present during the audits of the electronic voting and at least two months before election day to observe the fairness of the electoral process; this, in the words



dos meses de anticipación a las elecciones; lo que, en palabras del TSE, inviabiliza una observación adecuada.

Esta situación es una consecuencia de la negativa del Consejo Nacional Electoral y el gobierno nacional de ajustarse a los parámetros de la observación reconocidos internacionalmente. Por el contrario, el Consejo Nacional Electoral insiste en formatos de observación tutelados, carentes de autonomía funcional y operativa, y con acceso limitado a las diferentes fases del ciclo electoral. Lo anterior supone la deslegitimación del CNE y sus autoridades no solo a lo interno del país, sino también en el escenario internacional.

## 2. Proceso de Postulaciones

En otro orden de ideas, el proceso de judicialización electoral continúa acrecentándose. Cabe recordar que el Tribunal Supremo de Justicia intervino la directiva de los partidos COPEI, Movimiento Integridad Nacional (MIN-UNIDAD) y Bandera Roja, miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, nombrando temporalmente las directivas de dichas organizaciones. Esta decisión trajo como consecuencia que la Mesa de la Unidad Democrática no postulase a 26 candidatos provenientes del partido social-cristiano COPEI. El 29 de septiembre de 2015, Pedro Urrieta y Miguel Salazar introdujeron un recurso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia con el fin de que ser incluidos en la lista de la Mesa de la Unidad, lo que supondría un cambio de los candidatos de la coalición opositora por vía judicial.

Una decisión de esta naturaleza sería una violación del Artículo 67 de la constitución nacional, el cual indica que “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos y candidatas serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes”. De manera que una modificación de las postulaciones de la Mesa de la Unidad por parte del Tribunal Supremo de Justicia cercenaría el derecho los ciudadanos asociados en organizaciones con fines políticos a elegir su directiva y candidatos; imponiendo candidatos que no son representativos de las preferencias de los seguidores de la coalición opositora.

of the TSE, has meant that appropriate observation is no longer feasible.

This situation is the result of the refusal by the National Electoral Council (CNE) and the government to follow internationally accepted observation guidelines. On the contrary, the National Electoral Council insists on observation that is subject to oversight, lacking functional and operational autonomy, and with limited access to the different stages of the electoral cycle. This has deprived the CNE and its authorities of legitimacy, not only within the country, but on the international stage also.

## 2. Nomination Process

On another front, electoral judicialization is on the rise. Readers will recall that the Supreme Tribunal of Justice interfered in the leadership of COPEI, Movimiento Integridad Nacional (MIN-UNIDAD) and Bandera Roja, parties that are members of the Democratic Unity Roundtable, appointing temporary leaders for these organizations. The end result of this decision was that the Democratic Unity Roundtable did not nominate 26 candidates from the Social Christian party COPEI. On September 29, 2015, Pedro Urrieta and Miguel Salazar filed a petition at the Electoral Chamber of the Supreme Tribunal of Justice asking to be included among the nominees for the Unity Roundtable, which would have meant changing candidates for the opposition coalition by judicial means.

A decision of this kind would be in violation of article 67 of the Constitution, which reads: “All citizens have the right to form associations for political purposes, using democratic methods for organization, functioning and leadership. Their leadership bodies and their candidates are to be selected by internal elections with the participation of their membership.” Therefore, any changes involving the Unity Roundtable nominations ordered by the Supreme Tribunal of Justice would deprive the citizens who have joined together in organizations for political purposes of their right to elect their leadership and candidates, imposing candidates that do not represent the preferences of the supporters of the opposition coalition.

### 3. Precampaña

Uno de los aspectos sobre los cuales existe un vacío legal importante es el relativo a la regulación de la pre-campaña electoral. En el Artículo 71 del la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) establece que

Artículo 71. Se entiende por campaña electoral las actividades de carácter público desarrolladas por los candidatos y candidatas, organizaciones con fines políticos y grupos de electores y electoras que tengan como propósito captar, estimular o persuadir al electorado para que vote a favor de un candidato o una candidata dentro del lapso señalado por el Consejo Nacional Electoral.

El Consejo Nacional Electoral establecerá para cada proceso electoral el lapso de campaña electoral y sus regulaciones específicas.

En este sentido, la campaña electoral es toda actividad realizada por los candidatos con el fin de convencer a elector para que emita su voto por un partido o candidato determinado. Sin embargo, este tipo de mensajes debes hacerse dentro del período establecido por el CNE para la campaña. En el caso de las elecciones del 6 de diciembre, el periodo de campaña es del 13 de noviembre al 3 de diciembre; por lo que las organizaciones políticas no pueden realizar propaganda antes del inicio formal de la campaña.

No obstante, la realidad es muy distinta. Candidatos y organizaciones políticas de diversas tendencias se encuentran realizando actos de campaña a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta situación es consecuencia de la ambigüedad existente respecto a lo que se considera propaganda electoral y el tipo de actividades que se pueden realizar en los lapsos previos al inicio de la campaña formal. Tal como señala Salamanca (2014, p. 171)<sup>3</sup> “No es fácil regular la precampaña pero debe normarse porque hay actores que toman ventaja electoral adelantando la campaña. Debe, además, regularse fijando un período previo a la campaña, en el cual las organizaciones pueden escoger internamente sus candidatos con campañas limitadas al ámbito partidista”.

De manera que, la debilidad normativa e institucional del Consejo Nacional Electoral impide que se regule la actividad previa a la campaña. Pero más aún, a tres semanas del inicio de la

### 3. Pre-campaign

One of the aspects where an important legal gap exists has to do with regulations governing pre-campaign electoral activities. Article 71 of the Electoral Processes Act (LOPRE) states:

Article 71. An election campaign is understood to mean the public activities carried out by the candidates, organizations formed for political purposes and groups of voters for the purpose of attracting, fostering or persuading the electorate to vote for a candidate during the period set by the National Electoral Council.

The National Electoral Council shall set, for each electoral process, the period for the electoral campaign and the specific regulations governing the same .

Thus, an electoral campaign is understood to mean all activities carried out by the candidates for the purpose of persuading a voter to vote for a given party or candidate. Nevertheless, this kind of messages must be issued during the period set for the campaign by the CNE. In the case of the elections being held on December 6th, the campaign period is from November 13th through December 3rd; therefore, political organizations may not begin propaganda activities before the campaign formally begins.

What actually occurs, however, is far different. Candidates and political organizations from all sides are already campaigning all over the country. This situation is the consequence of the ambiguity as to what is considered electoral propaganda and what type of activities are allowed before formal campaigning begins. As pointed out by Salamanca (2014, p. 171)<sup>3</sup> “It is not easy to regulate the pre-campaign, but rules are needed because there are actors who take electoral advantage and begin campaigning early. Regulations are also needed to set a period prior to the campaign when the organizations may choose their candidates internally by means of campaign limited to party circles.”

Therefore, the regulatory and institutional weakness of the National Electoral Council prevents it from regulating activities prior to the campaign. In addition to this, however, with the beginning of the campaign just three weeks away, the CNE has not presented the first draft of the Campaign Regulations that, according to its own timetable, should have been approved by October 22, 2015.



campaña el CNE no ha mostrado el primer borrador del Reglamento de Campaña que, según su propio cronograma, debía estar aprobado para 22 de octubre de 2015.

En cualquier caso, si bien el aspecto técnico de la elección parece avanzar sin contratiempos; existen prácticas de orden político e institucional que generan dudas sobre la integridad electoral de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. La falta de voluntad políticas de las autoridades electorales ha traído como consecuencia que Brasil se retire de la misión de acompañamiento de UNASUR y que Colombia llame la atención sobre lo imparcial y creíble de la misma. Adicionalmente, el CNE no se ha propuesto sancionar a las organizaciones políticas por el adelanto de la campaña electoral. Finalmente, la judicialización de las elecciones es una de las amenazas más importante sobre la integridad electoral. Las decisiones tomadas por el TSJ en relación a los partidos y candidatos suponen violación de los principios de igualdad, transparencia e imparcialidad; lo que aunado a las acciones del CNE de permitir candidaturas extemporáneas, de los partidos intervenidos judicialmente, cambio de residencia de postulados y permisividad en el uso de recursos públicos por parte de gobierno; generan más dudas importantes sobre la falta de neutralidad de las autoridades electorales.

## Referencias

<sup>1</sup> VER: [El Universal](#)

<sup>2</sup> VER: [El Universal](#)

<sup>3</sup> Salamanca, Luis (2014). Venezuela: a la búsqueda de la competitividad electoral perdida. In Alarcón, B. y Casal, J.M. Proyecto Integridad Venezuela: las reformas impostergables. Caracas: Publicaciones UCAB.

Nevertheless, although the technical aspects of the election seem to be moving forward smoothly, there are political and institutional practices that have raised doubts concerning electoral integrity vis-à-vis the parliamentary elections on December 6th. The lack of political will on the part of the election authorities has prompted Brazil to withdraw from the UNASUR accompaniment mission, and Colombia to question the impartiality and credibility of the election. In addition, the CNE has shown no willingness to penalize the political organizations for moving ahead with the electoral campaign. Lastly, the judicialization of the elections poses one of the most serious threats to electoral integrity. The Supreme Tribunal's decisions in the case of the parties and candidates are a violation of the principles of equality, transparency and impartiality; this, together with the CNE's actions of allowing post-deadline enrollment of candidates for the parties subjected to judicial interference, changes of residence of nominees, and the use of public resources by the government, raise serious doubts concerning the lack of neutrality of the electoral authorities.

## References